

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 12º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-13023-2023
CARATULADO : SOTO/FISCO DE CHILE /

Santiago, trece de Agosto de dos mil veinticuatro

VISTOS

Que, con fecha 29 de julio de 2023, compareció BLANCA ROSA SOTO UGARTE, jubilada, cédula nacional de identidad N°6.929.544-4 y doña MARÍA SOLEDAD SOTO UGARTE, jubilada, cédula de identidad N°7.773.363-9, debidamente asistidas por el abogado don JUAN PABLO DELGADO DÍAZ, todos domiciliados para estos efectos en Alameda N°252, Santiago, quienes demandaron de indemnización de perjuicios al FISCO DE CHILE, representado hoy por su presidente don RAÚL LETELIER WARTENBERG, abogado, con domicilio hoy, en calle Agustinas N°1225, 4to. piso, Santiago.

Refieren que en el contexto del régimen de facto que gobernó Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, bajo cuyo imperio se habría implementado una política sistemática de detención, tortura y desaparición de ciudadanos opositores, el día 12 de octubre de 1973, a las 6:00 Am., una patrulla de efectivos militares ingresó violentamente a su vivienda, sin orden alguna, las trasladaron junto a su madre (amarradas y con los ojos vendados), al Regimiento San Bernardo. En la época, vivían en calle Pinto Plaza N°2880, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, sector que se encontraba asediado por funcionarios del Ejército de Chile, doña María, tenía 15 años y doña Blanca 21 años, estudiaba en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile y militaba en las Juventudes Comunistas, en la Brigada Ramona Parra.

Afirma que, cuando llegaron al Cerro Chena, vieron simulacros de fusilamiento, la primera noche la pasaron vendadas en una pieza y, escuchando los gritos de los hombres sometidos a tortura. Al día siguiente, las sometieron a interrogatorio, doña María, dice que fueron desnudada, sufrieron abuso sexual, trato humillante y vejatorio, con los ojos vendados, al terminar, la enviaron a la pieza donde estaba su madre, al día siguiente, continuaron con los interrogatorios hasta el 15 de octubre, las subieron a un camión y las dejaron en Gran Avenida a la altura del Llano, pudiendo llegar hasta su casa, a medianoche.



Foja: 1

Sostiene que las demandantes han sufrido un daño de índole extrapatrimonial, el cual se ha manifestado durante toda su vida, desde que tuvieron lugar los acontecimientos ya reseñados.

Afirman que fueron reconocidas por el Estado de Chile como víctimas de prisión política y tortura.

Argumentan que, conforme al derecho internacional, la Constitución Política de la República y, la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las demandantes fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad, lo que sería fundamental a la hora de resolver en cuanto a la responsabilidad de reparación que le cabe al Estado de Chile en este caso.

Cita jurisprudencia en la que se ha considerado un estatuto de normas que privilegian y desarrollan los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, debiendo ponderarse el estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito de los derechos humanos a la luz de las normas de carácter público e internacionales, poniendo el énfasis en la reparación integral de las víctimas de delitos de lesa humanidad.

Termina solicitando que se condene al demandado al pago de \$200.000.000 a título de indemnización por daño moral para cada una de las demandantes o la suma que el Tribunal en justicia determine, más reajustes e intereses y costas.

Que, con fecha 26 de septiembre de 2023, se practicó la notificación de la demanda y su proveído.

Que, con fecha 18 de octubre de 2023, el demandado contestó el libelo pretensor, solicitado el rechazo de éste en todas sus partes.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, la que funda en que la demandante ya ha sido suficientemente indemnizado con motivo de los hechos por él invocados, mediante transferencias directas de dinero (pensión anual establecida por la Ley N° 19.992), asignaciones de derechos sobre prestaciones estatales específicas (gratuidad en atenciones médicas, beneficios educacionales y subsidios de vivienda) y otras reparaciones de tipo simbólico (construcción de memoriales y del Museo de la Memoria, y establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido y el Premio Nacional de los Derechos Humanos).

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios deducida, conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, debiendo a su juicio rechazarse la demanda en todas sus partes.

Indica que tomando en consideración la época de los hechos descritos por el actor, y aun entendiendo suspendida la prescripción durante todo el período de la dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, a la fecha de notificación de la demanda



Foja: 1

de autos, habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio de lo anterior, para el evento de estimarse no aplicable la norma citada, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos del artículo 2515 en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil, por cuanto desde la fecha en que pudo ser exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda, también habría transcurrido el plazo antes mencionado.

Arguye que la indemnización de perjuicios, cualquiera que sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, siendo su contenido netamente patrimonial, de lo cual derivaría que la acción destinada a exigirla, como toda acción de esta índole, esté expuesta a extinguirse por prescripción, ya que a su respecto se aplican las normas del Código Civil, lo que no sería contrario a la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, por pertenecer al ámbito patrimonial.

Alega que no existiendo norma expresa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, sería menester entonces aplicar las normas de los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, los que establecen las reglas sobre la prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Cita también profusa jurisprudencia que haría suya las argumentaciones enunciadas a propósito de la excepción de prescripción.

En tercer lugar, y en subsidio de las defensas anteriores, manifiesta que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable mediante una cantidad de dinero u otro medio, sin que esto devengue en una fuente de lucro o ganancia, estimando que la cifra pretendida por el actor es absolutamente excesiva, teniendo presente las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia. Además, sostiene que cualquier indemnización que pudiera concederse en virtud de la sentencia que dirima esta controversia, debiera considerar los montos ya recibidos por el actor por parte del Estado, pues, de lo contrario, aquel recibiría un doble pago.

Por último, asevera que los reajustes e intereses que solicita la parte demandante no proceden tratándose de una obligación dineraria que solo podría establecerse con motivo de la sentencia que resuelva la presente litis.



Foja: 1

Que, con fecha 4 de noviembre de 2023, la parte demandante evacuó el trámite de réplica, reiterando los argumentos vertidos en la demanda.

Con relación a las excepciones opuestas por la demandada sostiene;

En primer lugar, en cuanto a la “excepción de pago integral”, señala que los beneficios concedidos por el Estado de las Víctimas de Tortura no pueden ser concebidos como una indemnización de perjuicios, sino como un beneficio de carácter asistencial. Además, afirma que, no son incompatibles con la indemnización que persiguen las demandantes. Asimismo, al amparo de diversas causas en las que se pretendió la reparación del daño moral, éstas han sido acogidas ordenando al Fisco de Chile, pagar una indemnización, como es el caso de VALENCIA OYARZO ELIECER CON FISCO DE CHILE, en el que se condenó al Fisco a pagar la suma de \$150.000.000 a víctimas sobrevivientes del centro de detención y tortura ubicado en la Isla Dawson (Rol Excma. Corte Suprema N°1.092-2015) y otros casos connotados, como la indemnización a los familiares de; Carmelo Soria, Tucapel Jiménez, Orlando Letelier, Otilia Vargas. Además, afirma que así lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema, reconociendo el carácter complementario que tienen las reparaciones económicas otorgadas mediante las leyes promulgadas desde la recuperación de la democracia en 1990 con las indemnizaciones obtenidas por la vía judicial, indicando que el otorgamiento de pensiones de las leyes reparatorias, no impiden a las víctimas obtener indemnizaciones por la vía de la demanda indemnizatoria de daño moral. Finalmente solicita que la excepción de pago opuesta por la defensa fiscal sea desestimada.

En segundo lugar, sostiene que, al amparo del caso Caro con Fisco de Chile”, en el cual la Corte Suprema señaló: “Que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, el principio de la responsabilidad del Estado, si bien se encuentra consagrado en el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, no indica cuál es su naturaleza, de suerte que para determinarla debe necesariamente recurrirse a la ley, en este caso, el artículo 4° del D.F.L. 19.653, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Esta disposición previene, que el Estado es responsable por los daños que causaren los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que la hubiere ocasionado”. Por otra parte, argumenta que conforme al derecho internacional y la jurisprudencia reiterada, el Estado es responsable de los daños que cause y, como ha sostenido la I. Corte de Apelaciones de Santiago; *“la imprescriptibilidad señalada rige tanto para el ámbito de lo penal como de lo civil, puesto que carece de sentido, frente a la antedicha afirmación basada en el ius cogens, sostener la imprescriptibilidad para el primer ámbito y desestimarla para el segundo, aduciendo para ello que éste es patrimonial, así como también el derecho a la indemnización reclamada, y por lo mismo privada y renunciable”* y, agrega que la H. Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y otros con Estado de Chile ha argumentado que en este tipo



Foja: 1

de casos se ha declarado por los Tribunales Superiores, la imprescriptibilidad de la acción civil en juicios por violaciones de derechos humanos.

Finalmente, en cuanto al daño y el monto demandado, sostiene que si bien no hay dinero que supla el dolor experimentado por las demandantes, es necesario poner una cifra en una demanda de Indemnización de perjuicios. Respecto de la imputación de la suma dadas por el Estado a las demandadas, para el caso del pago de una indemnización, asegura que se trata, de dos formas distintas de reparación, por lo que no importa de modo alguno la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare, por los medios que autoriza la ley, su procedencia. Añade que, los montos fijados a título de indemnización de perjuicios por los Tribunales de Justicia son propios de la esfera de su discreción y dicen relación estrecha con los hechos descritos en cada caso.

En cuanto a los reajustes e intereses, sostiene que la obligación del Fisco existe con anterioridad a la dictación de la sentencia, por consiguiente, no existe discusión acerca del plazo en que este reajuste debe computarse, además, según afirma, si los valores no son reajustados y se paga el monto condenado a la fecha en que la sentencia quede firme y ejecutoriada, no se considerará la devaluación de la moneda durante la secuela del juicio. Por todo lo anterior, solicita se desestimen estas alegaciones del Fisco de Chile.

Que, con fecha 14 de diciembre de 2023, el demandado evacuó la duplica, reiterando la contestación, sin agregar nuevos antecedentes.

Que, con fecha 12 de febrero de 2024, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales ésta hubo de recaer.

Que con fecha 2 de agosto de 2024, se citó a las partes para oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y, CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, doña BLANCA ROSA SOTO UGARTE y doña MARÍA SOLEDAD SOTO UGARTE, demandaron de indemnización de perjuicios al FISCO DE CHILE, representado por don RAÚL LETELIER WARTENBERG, Presidente del CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO, a objeto de que el ente estatal sea condenado a pagar en favor de cada uno de ellas, la suma de \$200.000.000, a título de indemnización por daño moral que se les infirió con ocasión de la privación de libertad y torturas de las que fueron víctimas a manos de agentes del Estado o la suma que el Tribunal en justicia determine, más reajustes e intereses y costas.

SEGUNDO: Que, legalmente emplazado, el demandado opuso primeramente la excepción de reparación satisfactiva, por ya haber recibido el demandante diversos beneficios asistenciales por parte del Estado. Asimismo, opuso la excepción de prescripción extintiva conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Por último, alega lo desproporcionado que resulta la suma pretendida por el actor, la improcedencia de que se le indemnice nuevamente a raíz de los mismos hechos y la



Foja: 1

impertinencia de aplicar intereses y reajustes sobre una eventual indemnización que se declare en la sentencia que dirima la controversia.

TERCERO: Que, en el trámite de la réplica la demandante buscó refutar las defensas opuestas por el demandado, manifestando que no ha existido una reparación íntegra por parte del Estado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que la prescripción civil no opera tratándose de atentados de lesa humanidad, y que la suma demandada es en atención al daño de que se trata y, que los reajustes se aplican desde la notificación de la demanda.

CUARTO: Que, en el trámite de la réplica el demandado se limitó a reiterar las argumentaciones ya vertidas en la contestación.

QUINTO: Que, para la prueba de sus asertos, la parte demandante acompañó, legalmente y sin objeción de contrario, los documentos que seguidamente se detallan

1. Certificado de calificación como víctima reconocida por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura relativo a doña BLANCA ROSA SOTO UGARTE, y copia autorizada de la página 169 del Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Informe Valech), con el Anexo Listado de Prisioneros políticos, donde aparece reconocida como víctima bajo el número 8521.
2. Copia de Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por BLANCA ROSA SOTO UGARTE, todas debidamente autorizadas por ministro de Fe del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
3. Certificado de calificación como víctima reconocida por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura relativo a doña MARÍA SOLEDAD SOTO UGARTE, y copia autorizada de la página 169 del Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Informe Valech), con el Anexo Listado de Prisioneros políticos, donde aparece reconocida, bajo el número 8522.
4. Copia de Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por MARÍA SOLEDAD SOTO UGARTE, todas debidamente autorizadas por ministro de Fe del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
5. Copia del Comprobante de Ingreso de Antecedentes de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura con nombre de doña María Soledad Soto Ugarte.
6. Certificado de nacimiento de doña Blanca Soto Ugarte.
7. Certificado de nacimiento de doña María Soledad Soto Ugarte.
8. Informe Psicológico Evaluación de Daño asociado a violencia política en dictadura suscrito por la psicóloga Daniela Gamboa Toledo y la médica internista, doña Pamela Alejandra Jeria Ortiz, del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, relativo a Blanca Rosa Soto Ugarte, en 2023.



Foja: 1

9. Copia de Norma Técnica N°88. Para la Atención en Salud de Personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el período 1973-1990, elaborado por la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, de 30 de junio de 2006.
10. Sentencias de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, a título ejemplar:
 - Excma. Corte Suprema. Causa Rol 18.179-2019. Sentencia de casación de 06 de diciembre de 2019, caratulado “Torres con Fisco”
 - Excma. Corte Suprema. Causa Rol 18.179-2019. Sentencia de reemplazo de 06 de diciembre de 2019, caratulado “Torres con Fisco”.
 - Excma. Corte Suprema. Causa Rol 13.877-2019. Sentencia de casación de 24 de diciembre de 2021, por el homicidio de don Augusto Cepeda Venegas.
 - Excma. Corte Suprema. Causa Rol 13.877-2019. Sentencia de reemplazo de 24 de diciembre de 2021, por el homicidio de don Augusto Cepeda Venegas.
 - Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago. Causa Rol 5312-2020. Sentencia de segunda instancia de 21 de agosto de 2020, caratulado “Heitmann con Fisco de Chile”.
 - 20° Juzgado Civil de Santiago. Causa Rol 17349-2018. Sentencia de primera instancia de 20 de marzo de 2020, caratulado “Heitmann con Fisco de Chile”.
 - Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago. Causa Rol 14216-2020. Sentencia de segunda instancia de 12 de marzo de 2021, caratulado “Hernández Fisco de Chile”.
 - 30° Juzgado Civil de Santiago. Causa Rol 1230-2018. Sentencia de primera instancia de 27 de octubre de 2020, caratulado “Hernández con Fisco de Chile”.
11. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aceptación de responsabilidad del Estado de Chile.
 - Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2018.
 - Escrito de contestación del Estado de Chile en el Caso Órdenes Guerra, Rol CDH-2-2017/038, en el mes de febrero 2018, donde se reconoce responsabilidad internacional por aplicar la prescripción civil en causas de derechos humanos.

SEXTO: Que la parte demandante también allegó al proceso prueba testimonial que a continuación se reseñan sucintamente:

- MYRIAM FARIAS ROJAS



Foja: 1

Declara conocer a las demandantes porque fue compañera de una de ellas, que también es profesora. Dice que, en esa época, existía miedo y desconfianza, después de mucho tiempo, Blanca le habría dicho lo que le sucedió con la detención, también pudo observar lo afectadas que estaban la madre y hermana menor. Además, agrega que, Blanca se sintió culpable, porque quedó en una lista negra y le costó conseguir trabajo. Señala además que, Blanca tenía crisis de angustia y, María Soledad, depresión.

- BLANCA MERCEDES DÍAS IBAÑEZ

Declara conocer a las hermanas porque su marido es amigo de María Soledad y que presentan problemas de salud psicológica y emocional., de los que da cuenta, tales como problemas de sueño, a nivel marital, con los hijos, ansiedad, etc. En cuanto a la lista negra, dice que tuvo a la vista un documento en donde aparecían sus nombres y, que era sabido por otras personas en común, que no tenían trabajo porque estaban en una lista negra.

Declara además que, Soledad, presentaba muchas licencias médicas,

- VILMA ESTER REYES GALLARDO

Declara que conoce a las demandantes desde 1971, era compañera de María Soledad y sabe que las hermanas fueron detenidas, lo sabe porque un día no fue a clases María Soledad, como vivían en el mismo barrio, fue a preguntar por ella, y una tía le dijo que habían llegado militares y se las habían llevado al Cerro Chena. Dice que sufrieron, puesto que los militares las hicieron ver, los simulacros de fusilamiento contra su madre y que iban a violar a María Soledad. Declara que Soledad no volvió a ser la misma; estaba a la defensiva, lloraba de la nada, a veces no dormía en las noches y tenía terror a los Carabineros. En cuanto a Blanca, declara que estuvo en una lista negra y le costó encontrar trabajo.

SÉPTIMO: Que, el demandado, en apoyo de sus asertos, acompañó un oficio de fecha 18 de julio de 2024, remitido por el Instituto de Previsión Social, que informa detalles de los beneficios de reparación Leyes N°s19.992 y 20.874 recibidos por las demandantes y en el que consta que doña Blanca Soto, ha recibido la suma total de \$29.989.998, correspondientes al aporte único de la Ley N°20.874 y pensiones ley 19992 y ley 19.234 desde el año 2011 al 2024 y, que doña María Soledad Soto, ha recibido la suma total de \$29.428.099, correspondientes al aporte único de la Ley N°20.874 y pensión de la ley 19992, entre el año 2011 al año 2024.

OCTAVO: Que, como es de público conocimiento el 11 de septiembre de 1973, Chile vivió un quiebre institucional. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, se levantaron en armas contra el gobierno de Salvador Allende. Los golpistas conformaron una Junta Militar, compuesta por los comandantes en jefe de las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. El 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar declaró que



Foja: 1

asumía el "Mando Supremo de la Nación.", entendiendo por tal la concentración de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Constituyente.

A continuación del golpe militar, mediante distintos decretos leyes, disolvieron el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional; se proscribió a los partidos políticos que conformaban la Unidad Popular y se destruyeron los registros electorales. En consonancia con las anteriores medidas orientadas a desarticular las instituciones y los procedimientos requeridos por una democracia representativa.

La Junta Militar también sometió a control las actividades de las organizaciones sindicales e intervino las universidades públicas y privadas. Se instauró una rigurosa censura a la prensa escrita, la radio y la televisión que puso fin a cualquier medio de comunicación masiva capaz de cuestionar o fiscalizar las acciones del régimen militar, con lo cual se implantaron condiciones proclives a los abusos de poder, sea en la forma de la prisión política o la tortura. Simultáneamente, el toque de queda, vigente durante años, sustrajo del escrutinio público las acciones de los agentes del Estado ocupados de la represión, autorizados para circular libremente en las horas prohibidas. El exilio por motivos de orden político entró en acción inmediatamente, afectando a miles de personas, muchas de las cuales, antes de hacer abandono del país, sufrieron prisión política y tortura.

En concordancia con todo lo anterior, la Junta suspendió las garantías individuales, desde el mismo 11 de septiembre de 1973. Asimismo, como establece el Decreto Ley N°5, publicado en el Diario Oficial del 22 de septiembre de 1973, el "estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias en que vive el país", debía considerarse como un "estado o tiempo de guerra" sometido al régimen jurídico que el Código de Justicia Militar y otras leyes penales contemplan para tales situaciones críticas. Esta preceptiva no hacía otra cosa que retirar de manos de la justicia ordinaria en beneficio de la justicia militar de tiempo de guerra el "conocimiento y la decisión de las causas por infracción a las normas sobre estado de sitio". Sin justificación real, ante la inexistencia de un contexto de guerra interna, en ausencia de una lucha armada que hiciera peligrar el monopolio de la fuerza reservado a las Fuerzas Armadas y de Orden.

Asimismo, se aplicaron sus procedimientos coercitivos y, no se respetó el derecho de los prisioneros, ni se consideró ninguno de los preceptos establecidos en las convenciones internacionales sobre la guerra.

La represión política -fusilamientos sumarios, tortura sistemática, privación arbitraria de libertad en recintos al margen del escrutinio de la ley, conculcación de derechos humanos fundamentales- operó desde el 11 de septiembre de 1973 y, hasta el fin de la dictadura cívico- militar.

Todo esto permite concluir que la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la



Foja: 1

época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas. (nota: todo el relato de contexto puede ser revisado en el Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura)

NOVENO: Que, tal y como lo consigna el Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, la dictadura cívico-militar, utilizó diversos centros o campos de detención, entre los cuales, es conocido el regimiento de Infantería de San Bernardo y el cuartel N°2; Cerro Chena y que de acuerdo al Informe VALECH; La mayoría de las detenciones denunciadas en este recinto se registraron en 1973 y que de acuerdo a diversos testimonios; sufrieron amenazas; golpes, en algunas ocasiones con palos, en la cabeza; aplicación de electricidad, simulacros de fusilamiento, quemaduras con cigarrillos, fueron obligados a correr con los ojos vendados, obligados a presenciar y escuchar las torturas a otros detenidos y fueron sometidos al submarino en tambores con inmundicias. En el Cerro Chena, muchos denunciaron haber sufrido aplicación de electricidad, golpes, haber sido amarrados con alambres, el submarino seco y el mojado, amenazas, el teléfono, fueron obligados a permanecer en posiciones forzadas, a quemaduras con cigarros, vejámenes y violaciones sexuales, fueron obligados a escuchar las torturas a otros detenidos, fueron sometidos a colgamientos prolongados y a simulacros de ejecución continuamente.

También se los hacía saltar vendados sobre el canal ubicado en la parte baja del recinto y otras veces se los hizo chocar vendados contra paredes.

Testimonios de detenidos que estuvieron en la parte alta del cerro señalan que allí dormían sobre sacos puestos en el cemento y se tapaban con paja. Los privaron de alimento, les impedían dormir y estaban permanentemente con los ojos vendados.

Que, asimismo consta que la dictadura cívico-militar, uso diversos métodos de tortura algunos de estos constan en el relato de las demandantes, tales como; abusos sexuales y otras vejaciones, privación de alimentos, escuchar o presenciar la tortura de otros, simulacro de fusilamiento, entre otros¹.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de no haber sido controvertido por el demandado el relato de los hechos, con el mérito del documentos que constan en el considerando Quinto, más el oficio de fecha 18 de julio de 2024, remitido por el Instituto de Previsión Social, que consta en el considerando Sexto, resulta plenamente acreditada la circunstancia de haber sido las demandantes, víctimas de privación de libertad y torturas a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973.

¹ (nota: todo el relato de los métodos de torturas y lugares de detención; puede ser revisado en el Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura desde la pág. 225 en adelante y, 259 en adelante, respectivamente).



Foja: 1

UNDÉCIMO: Que, conforme a lo establecido precedentemente, resulta clara la responsabilidad civil del Estado emanada de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, disponiendo el inciso final de la norma citada que la infracción de la misma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; y, además, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por el demandado, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por la Ley N°20.874 a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

DUODÉCIMO: Que, los vejámenes de los que fueron víctimas las demandantes de autos han sido calificados como delitos de lesa humanidad, siendo, a su vez, expresas violaciones a los derechos humanos, según lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990, en virtud de la cual los Estados Americanos signatarios reconocen, entre otras garantías fundamentales, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, sin que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente (artículo 4); que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, sin que nadie deba ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5); que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin poder ser privado de aquella, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas, ni tampoco ser objeto de detención o encarcelamiento arbitrarios (artículo 7); que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado (artículo 17); que existe una correlación entre deberes y derechos, por lo que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, estando limitados los derechos de cada persona por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática (artículo 32); que se le reconoce competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, disponga, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada (artículo 63); que la parte del fallo que disponga una indemnización



Foja: 1

compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado (artículo 68 N° 2).

Asimismo, conviene consignar que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile desde el año 1989, los Estados acuerdan que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto que el Pacto no les reconoce o los reconoce en menor grado (artículo 5 N°2); teniendo toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, el derecho efectivo a obtener reparación (artículo 9 N°5).

DÉCIMO TERCERO: Que, en el marco del reconocimiento de la violación de derechos humanos en nuestro país por parte de agentes del Estado durante la dictadura militar, se dictó en el año 1992 la Ley N°19.123, mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a la cual, entre sus diversos objetivos, se le encomendó especialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.

A su vez, la Ley N°19.992 estableció una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Dicha pensión asciende a una suma que alcanza entre \$1.353.798 y \$1.549.422, según la edad del beneficiario, y se reajusta conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N°2.448, de 1979 o en las normas legales que reemplacen la referida disposición. Junto a la asignación aludida, la ley que se viene reseñando también otorga a sus beneficiarios, en carácter de gratuitas, las prestaciones médicas y educacionales que detalla.

De igual manera, la Ley N°20.874 concedió un aporte único, en carácter de reparación parcial de \$1.000.000, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo las condiciones que señala, y que será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

DÉCIMO CUARTO: Que, las leyes precedentemente señaladas, denominadas "*leyes de reparación*", si bien son un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el daño causado a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o a sus familiares directos, en modo alguno obstan el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado involucrados en una política civil de terror, cual es lo acontecido en la especie, de obtener una indemnización distinta de una reparación meramente de carácter asistencial, que es lo que establecen las leyes referidas, conforme al análisis de sus supuestos, renunciias permitidas y equiparidad de beneficios



Foja: 1

que involucran; sin desconocer que tales beneficios constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado, objetivo resarcitorio coincidente con la presente vía jurisdiccional, pero no incompatible, como se dijo, con la misma.

Asimismo, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes citadas, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

DÉCIMO QUINTO: Que, a mayor abundamiento, en la contestación del Estado de Chile, ante la CIDH, en el “CASO ÓRDENES GUERRA Y OTROS VS. CHILE”, según consigna la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2018, el Estado de Chile reconoció su responsabilidad internacional por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción a acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad y en que además, la CIDH, consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de la prescripción.

A partir de lo anterior, la CIDH, consideró que existían elementos suficientes para tener por configurada la responsabilidad objetiva del Estado por incumplir con su deber de garantizar los derechos a las víctimas [...], al no lograr restablecer la plenitud del derecho a obtener una reparación; [...] Ante lo que el Estado de Chile, reconoció que las medidas que fueron adoptadas en los procesos judiciales no fueron efectivas de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, y afirmó; *“práctica judicial que ha sido corregida en los últimos años con el cambio de criterio jurisprudencial en la materia, adoptado por los Tribunales nacionales y que se mantiene en la actualidad”*.

En este sentido, el fallo de la CIDH, razona que *“en paralelo al cambio jurisprudencial referido, la Corte Suprema ha reconocido el carácter complementario que tienen las reparaciones económicas otorgadas mediante las leyes promulgadas desde la recuperación de la democracia en 1990 con las indemnizaciones obtenidas por la vía judicial, indicando que el otorgamiento de pensiones de la Ley N° 19.123 no impide a las víctimas obtener indemnizaciones por la vía de la demanda indemnizatoria de daño moral, desestimando razonamientos que consideraban la reparación administrativa como excluyente de la reparación judicial”*

De acuerdo con lo razonado, se procederá el rechazo de la excepción de reparación integral opuesta por el demandado.

DÉCIMO SEXTO: Que, en segundo lugar, el demandado opuso la excepción de prescripción extintiva, fundada en que la acción indemnizatoria incoada en autos no fue interpuesta y notificada, una vez recuperada la democracia, en el plazo de cuatro o cinco años que disponen, respectivamente, los artículos 2332 y 2497 del Código Civil.



Foja: 1

Sobre lo anterior cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República, que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, la disposición constitucional citada precedentemente permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre las cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que adquiere rango constitucional.

DÉCIMO OCTAVO: Que, la prescripción extintiva de la acción deducida no puede por tanto decidirse sobre la base de las disposiciones del Código Civil, las que son aplicables a delitos civiles comunes, representando un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del hecho ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, quedando la acción indemnizatoria en tal caso bajo las normas que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del ius cogens o reglas imperativas de derecho internacional.

DÉCIMO NOVENO: Que, en consecuencia, no existe norma internacional, como tal, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico que establezca la imprescriptibilidad genérica de acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad. Sin perjuicio de ello, de los variados tratados internacionales suscritos por Chile, es posible concluir que cuando se trata de la vulneración por motivos políticos de los derechos fundamentales, anteriores y superiores éstos al Estado mismo y a la Constitución, nuestro derecho interno, a la luz de los tratados internacionales en esta materia, debe darles seguridad y eficaz protección, reconociendo, declarando y potenciando el ejercicio de los derechos, debiendo el Estado cumplir no sólo con su obligación de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos, sino que también repararlos en su integridad.

VIGÉSIMO: Que, de esta manera, la acción resarcitoria de los delitos de lesa humanidad es tan imprescriptible como lo es la investigación y sanción de los mismos, de modo que siendo uno de estos ilícitos el hecho generador del daño que se invoca, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto.

Lo que encuentra sustento en recientes sentencias de la Excm. Corte Suprema “Quinto: Que, más allá de lo razonado por los jueces ad quem, reiterada jurisprudencia de esta Corte precisa que, tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado



Foja: 1

en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que instauro el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS N°20.288-14 de 13 de abril de 2105.

Finalmente, es necesario traer a colación el CASO ÓRDENES GUERRA Y OTROS VS. CHILE, por cuanto, el Estado argumentó que *“el Poder Judicial chileno, ha incorporado estándares de derechos humanos en las sentencias sobre causas de la dictadura, lo que ha influido jurisprudencialmente en temas como la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, avanzando hacia un pleno cumplimiento del derecho a la verdad y justicia y que en materia civil indemnizatoria, la Corte Suprema ha oscilado desde la aplicación de normas del derecho civil a la aplicación de los art. 1.1 y 6.3 de la CIDH, sosteniendo con ello que el Estado tiene la obligación de reparar a víctimas de violaciones graves y masivas a los derechos humanos sin excusarse en su legislación, pues compromete su responsabilidad internacional”*, reconociendo de esta forma, que la Excm. Corte Suprema y en general el Poder Judicial, ha incorporado estándares de derechos humanos.

Así las cosas, la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado también habrá de ser desestimada.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en cuanto a la procedencia de la indemnización de perjuicios por daño moral, entendido este como un detrimento que se causa por la vulneración a los sentimientos íntimos de una persona, como también el que surge producto del dolor físico o psíquico infligido antijurídicamente a un individuo, habrá de decirse que, en la especie y como ya se ha dicho, se ha acreditado suficientemente que las demandantes fueron víctimas de privación de libertad, malos tratos y torturas, a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973, lo que es bastante para haber generado en doña Blanca y doña María, secuelas como las descritas, suponiendo todo esto una inconmensurable aflicción tanto espiritual como física experimentada por las demandantes, difícilmente superable por el mero transcurso del tiempo y, que es consecuencial a un sistemático actuar despiadado llevado a cabo por agentes del Estado.



Foja: 1

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, el hito generador de los perjuicios cuya indemnización se persigue es inherente a todo cuanto fluye de los hechos dados por acreditados y no discutidos por el demandado, siendo el daño alegado igualmente inseparable de la naturaleza de los hechos, en cuanto resulta evidente que éste se produjo al verse las demandantes privadas arbitrariamente de su libertad personal y luego sometidas a diversos malos tratos y torturas. Que, de esta manera, los hechos en que incurrieron agentes del Estado de Chile produjeron el evidente daño moral padecido por las demandantes, encontrándose aquel, en definitiva, obligado a indemnizarlas.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, en relación con el quantum indemnizatorio, cabe tener presente el oficio remitido a este Tribunal por el Instituto de Previsión Social, que da cuenta que doña Blanca, es beneficiario de pensión pecuniaria por parte del Estado, en virtud de las denominadas "*leyes de reparación*", por un total de \$29.989.998 y doña María, también es beneficiaria de pensión pecuniaria por parte del Estado, por un total de \$29.428.099 que como ya se ha dicho, no es incompatible con la Indemnización que se pretende.

Que, asimismo, las demandantes son asignatarias del Aporte Único de la Ley 20.874, debido a ello, y teniendo presente lo ya consignado en el considerando DECIMO TERCERO, la suma que con motivo de esta sentencia se concederá a cada una de las demandantes, a título de daño moral se fijará en la suma de \$30.000.000.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, en materia de reajustes, como no habrá de concederse una indemnización por daño emergente o lucro cesante, ni tampoco por el total de lo pretendido a título de reparación de daño moral, ninguna importancia o utilidad revisten estos accesorios para la actualización del valor adquisitivo de la moneda, toda vez que éste va considerado en el monto que es actualmente fijado para avaluar la indemnización prudencialmente determinada.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en lo que concierne a los intereses reclamados, es preciso señalar que la cuantía de la obligación indemnizatoria se fija prudencialmente en la sentencia definitiva cuando su objeto es resarcir el daño extrapatrimonial, por estos motivos, se accederá a la condena al pago de intereses corrientes para operaciones en moneda nacional reajustables a contar de la época en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y, hasta la época de su pago efectivo.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, no siendo completamente vencido el demandado, no se accederá a la condena en costas de este.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; artículos 4, 5, 7, 17, 32, 63 y 68 N° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 5 N° 2 y 9 N° 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575; artículos 1 y 2 de la Ley N°



Foja: 1

19.123; artículos 1 y 2 de la Ley N° 19.992; artículo 1 de la Ley N° 20.874; 1437, 1698 y siguientes, 2284, 2314, 2332, 2514 y 2515 del Código Civil; y artículos 144, 160, 170, 254, 341, 342 N° 3, 346 N° 1, 356, 384 N° 2, 399, 402, 426, 748 y 751 del Código de Procedimiento Civil; **SE DECLARA:**

- I. Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva opuestas por el demandado en su escrito de contestación.
- II. Que se acoge parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos, sólo en cuanto se condena al demandado FISCO DE CHILE al pago de; \$30.000.000 en favor de doña BLANCA ROSA SOTO UGARTE y, \$30.000.000 en favor de doña MARÍA SOLEDAD SOTO UGARTE, por concepto de daño moral.
- III. Que, la suma decretada precedentemente deberá ser pagada con intereses corrientes para operaciones reajustables en moneda nacional calculados a contar de la época en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y hasta la época de su pago efectivo.
- IV. Que cada parte pagará sus costas.

Rol C-13023-2023

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CONSÚLTESE SI NO SE APELARE

**DECTADA POR DOÑA MARÍA SOFÍA GUTÍÉRREZ BERMEDO, JUEZA
TITULAR.//**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, trece de Agosto de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GXENXPYKHYX

